

No. 14668. Multilateral

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS. NEW YORK, 16 DECEMBER 1966 [*United Nations, Treaty Series, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Ecuador

Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 3 February 2017

Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 3 February 2017

N° 14668. Multilatéral

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [*Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4

Équateur

Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 3 février 2017

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 3 février 2017

[TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL]

No. 4-2-12/2017

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS saluda muy atentamente a la Secretaría de la Organización, en ocasión de informarle que debido a las agresiones a miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en los cantones de San Juan Bosco y Limón Indaza, realizados durante el mes de diciembre de 2016 por parte de grupos ilegalmente armados, el Gobierno de la República del Ecuador a fin de garantizar los derechos, la seguridad interna, ciudadana y humana de los habitantes de la provincia de Morona Santiago, ha renovado el estado de excepción en esa zona mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 1294 de 12 de enero de 2017 .

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS, remite adjunto el Decreto Ejecutivo Nro. 1294 y en apego al Artículo 4 numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, solicita muy comedidamente a la Secretaría General comunicar de tal suspensión a todos los Estados Partes de este instrumento internacional.

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS hace propicia la ocasión para reiterar a la Secretaría de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Nueva York, 17 de enero de 2017

A la Secretaría de las Naciones Unidas
Nueva York

Nº 1294

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo primero de la Constitución de la República, en sus dos primeros incisos establecen:

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.”;

Que, el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República instituye que uno de los deberes primordiales del Estado es el de garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;

Que, el apartado a) del numeral 3 del artículo 66 de la Constitución de la República establece que el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal que incluye entre otras la integridad física, psíquica y moral;

Que, el artículo 164 de la Constitución de la República faculta al Presidente de la República decretar estados de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado.;

Que el artículo 393 de la Constitución de la República estatuye que el *Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno;*

Que, el artículo 32 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece que los casos de estado de excepción son: *agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural;*

Que, el artículo 35 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece: *Declarado el estado de excepción y siempre que el Presidente de la República haya dispuesto el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, deberán coordinar acciones para*

Nº 1294

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, responsable del mantenimiento del orden público, hasta que éste haya sido restablecido;

Que, es necesario precaver efectos que se pueden generar por las agresiones a miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en la provincia de Morona Santiago, Cantones San Juan Bosco y Limón Indaza, por parte de grupos ilegalmente armados; y, que por tanto, atentan contra la seguridad ciudadana, la integridad de las personas, y la paz y convivencia social;

Que, se vuelve necesario identificar el grupo o grupos de personas ilegalmente armadas que se han reunido para generar estos actos de agresión, con el fin de evitar futuros hechos de violencia que puedan comprometer los derechos fundamentales de los ciudadanos;

Que, algunos medios locales de comunicación que han servido de plataforma para instigar y provocar los referidos actos de agresión y violencia;

Que, el Ministro de Coordinación de Seguridad, mediante oficio No. MICS-DM-2017-0026 de 9 de enero de 2017, solicitó la renovación de la declaratoria del estado de excepción;

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 164 y siguientes de la Constitución de la República; y, 29, 32 y siguientes de la Ley de Seguridad Pública y del Estado,

DECRETA:

Artículo 1.- RENOVAR la DECLARATORIA del Estado de Excepción en el territorio de la Provincia de Morona Santiago, en razón de los efectos de las agresiones a miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en la Provincia de Morona Santiago, cantones San Juan Bosco y Limón Indaza, realizados durante el mes de diciembre de 2016, por parte de grupos ilegalmente armados, han atentado contra la seguridad ciudadana, la integridad de las personas, y la paz y convivencia social, que generan una grave conmoción interna en esa provincia de la región amazónica.

Artículo 2.- LA MOVILIZACIÓN de personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, para garantizar el orden interno en la Provincia de Morona Santiago.

Se dispone a los señores Ministros Defensa Nacional y del Interior para que, mediante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ejecuten las acciones necesarias con la finalidad de que se garantice a los habitantes de la

Nº 1294

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

Provincia de Morona Santiago seguridad interna, ciudadana y humana, derechos tutelados por la Constitución de la República y deber fundamental del Estado.

Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio de los derechos previstos en los numerales, 13, 14, y 22 del artículo 66 de la Constitución de la República, y el derecho a la información en los términos del numeral 4 del artículo 165 del mismo Código Político, en la Provincia de Morona Santiago, que se refieren a: el derecho a la libertad de expresión y opinión, el derecho a asociarse y reunirse; el derecho a transitar libremente; y el derecho a la inviolabilidad de domicilio por cuanto algunos ciudadanos pretenden generar violencia que constituye un riesgo para su vida o integridad física.

El Ministerio de Coordinación de Seguridad determinará la forma de aplicar esta medida, en especial para garantizar plenamente la realización del proceso electoral en curso.

Artículo 4.- El período de duración de esta renovación del estado de excepción es de 30 días a partir de la suscripción del presente decreto ejecutivo. El ámbito territorial de aplicación es la Provincia de Morona Santiago.

Artículo 5.- Notifíquese esta renovación de la declaratoria a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, a la Organización de los Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas.

Artículo 6.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense los Ministros de Defensa y del Interior.

Dado en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 12 de Enero de 2017.



Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Note No. 4-2-12/2017

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations presents its compliments to the Secretariat of the United Nations and informs it that, because of the attacks on members of the National Police and Armed Forces in the cantons of San Juan Bosco and Limón Indaza perpetrated in December 2016 by unlawfully armed groups, the Government of the Republic of Ecuador has decided, in order to protect the rights, and the internal, public and human security of the inhabitants of the Province of Morona Santiago, to renew the state of emergency in that area by Executive Decree No. 1294 of 12 January 2017.

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations is attaching herewith Executive Decree No. 1294 and, in accordance with article 4, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, requests the Secretariat to inform all States parties to this international instrument of this suspension.

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations takes this opportunity to convey to the Secretariat of the United Nations the renewed assurances of its highest consideration.

New York, 17 January 2017

No. 1294

**Rafael Correa Delgado,
Constitutional President of the Republic**

Considering:

That the first two paragraphs of article 1 of the Constitution of the Republic provide that:

“Ecuador is a constitutional State of rights and justice, a social, democratic, sovereign, independent, unitary, intercultural, multinational and secular State. It is organized as a republic and is governed using a decentralized approach.

Sovereignty lies with the people, whose will is the basis of all authority, and it is exercised through public bodies using direct participatory forms of government as provided for by the Constitution”;

That article 3, paragraph 8, of the Constitution of the Republic stipulates that one of the State’s prime duties is guaranteeing its inhabitants the right to a culture of peace, to integral security and to live in a democratic society free of corruption;

That article 66, paragraph 3 (a), of the Constitution of the Republic provides that the State recognizes and guarantees the right of persons to personal integrity, which includes bodily, psychological and moral safety;

That article 164 of the Constitution of the Republic empowers the President of the Republic to declare a state of emergency in all or part of the national territory in the event of aggression, international or domestic armed conflict, severe domestic unrest, public calamity or natural disaster. The declaration of a state of emergency shall not interrupt the activities of the State's duties;

That article 393 of the Constitution of the Republic stipulates that the State shall guarantee human safety by means of integrated policies and actions to ensure the peaceful coexistence of persons, to promote a culture of peace and to prevent forms of violence and discrimination and the perpetration of offences and crimes. The planning and application of these policies shall be entrusted to specialized bodies at the different levels of government;

That article 32 of the Public and State Security Act provides that a state of emergency may be declared in the following situations: aggression, international or domestic armed conflict, severe domestic unrest, public calamity or natural disaster;

That article 35 of the Public and State Security Act provides as follows: When a state of emergency has been declared, and if the President of the Republic has ordered the use of the Armed Forces and the National Police, measures shall be coordinated to ensure that the Armed Forces support the National Police, who are responsible for law enforcement until public order has been restored;

That it is necessary to prevent effects that may be caused by the attacks on members of the National Police and Armed Forces in the Province of Morona Santiago, in the cantons of San Juan Bosco and Limón Indaza, perpetrated by unlawfully armed groups, which are undermining public safety, the integrity of persons and peaceful coexistence;

That in order to prevent further acts of violence which could threaten the fundamental rights of citizens, it will be necessary to identify the group or groups of unlawfully armed persons who gathered to carry out these acts of aggression;

That some local communications media have been used as a platform to instigate and incite these acts of aggression and violence;

That the Minister of Security Coordination, by official letter No. MICS-DM-2017-0026 of 9 January 2017, requested the renewal of the state of emergency;

In exercise of the powers conferred upon him by articles 164 et seq. of the Constitution of the Republic, and articles 29, 32 et seq. of the Public and State Security Act,

Hereby decrees:

Article 1. The state of emergency is renewed in the territory of the Province of Morona Santiago because the attacks on members of the National Police and Armed Forces in the Province of Morona Santiago, in the cantons of San Juan Bosco and Limón Indaza, perpetrated in December 2016 by unlawfully armed groups, have undermined public safety, the integrity of persons and peaceful coexistence, and have resulted in severe domestic unrest in that province of the Amazon region.

Article 2. The National Police and Armed Forces shall be mobilized to enforce law and order in the Province of Morona Santiago.

The Minister of National Defence and the Minister of the Interior, through the Joint Command of the Armed Forces and the National Police, shall take the necessary measures to guarantee to the inhabitants of the Province of Morona Santiago internal, public and human security, which are rights protected by the Constitution of the Republic and the fundamental duty of the State.

Article 3. The rights set out in article 66, paragraphs 13, 14 and 22, of the Constitution of the Republic, together with the right to information under article 165, paragraph 4, of the Constitution, shall be suspended in the Province of Morona Santiago, with reference to: the right to freedom of expression and opinion; freedom of association and assembly; freedom of movement; and the right to inviolability of the home, as certain citizens are attempting to incite violence constituting a risk to life and bodily safety.

The Ministry of Security Coordination shall determine the form of implementation of this measure, in particular in order to fully guarantee the holding of the electoral process under way.

Article 4. This renewed state of emergency shall remain in force for 30 days as from the date of signature of the present executive decree. The territorial scope of application is the Province of Morona Santiago.

Article 5. This renewal shall be communicated to the National Assembly, the Constitutional Court, the Organization of American States and the United Nations.

Article 6. The Minister of Defence and the Minister of the Interior shall be responsible for executing this executive decree, which shall enter into force on the date of issue, without prejudice to the publication thereof in the Official Gazette.

DONE at San Francisco de Quito, Metropolitan District, on 12 January 2017.

(Signed) Rafael Correa Delgado
Constitutional President of the Republic

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Note N° 4-2-12/2017

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétariat de l'Organisation, et l'informe par la présente qu'en raison des agressions contre les membres de la police nationale et des forces armées ayant eu lieu au mois de décembre 2016 dans les cantons de San Juan Bosco et Limón Indaza, commises par des groupes illégalement armés, le Gouvernement de la République de l'Équateur, afin de garantir les droits, la sécurité intérieure, citoyenne et humaine des habitants de la province de Morona Santiago, a décidé de proroger l'état d'exception dans cette zone par le décret exécutif n° 1294 du 12 janvier 2017.

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies joint aux présentes le décret exécutif n° 1294 et, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, prie le Secrétariat général de bien vouloir informer tous les États parties à cet instrument international de cette suspension.

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

New York, le 17 janvier 2017

N° 1294

Rafael Correa Delgado
Président constitutionnel de la République

Considérant :

Que l'article premier de la Constitution de la République dispose en ses deux premiers paragraphes :

« L'Équateur est un État constitutionnel de droits et de justice, social, démocratique, souverain, indépendant, unitaire, interculturel, plurinational et laïc. Il est organisé sous forme de république et gouverné de manière décentralisée.

La souveraineté repose dans le peuple dont la volonté est le fondement de l'autorité et s'exerce à travers les organes du pouvoir public et les formes de participation directe prévues par la Constitution » ;

Qu'aux termes du paragraphe 8 de l'article 3 de la Constitution de la République, l'un des devoirs fondamentaux de l'État est de garantir à ses citoyens le droit à une culture de paix, à la pleine sécurité et à une société démocratique et sans corruption ;

Qu'aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 66 de la Constitution de la République, l'État reconnaît et garantit le droit à l'intégrité des personnes, qui comprend notamment l'intégrité physique, psychique et morale ;

Qu'aux termes de l'article 164 de la Constitution de la République, le Président de la République peut décréter l'état d'exception sur tout ou partie du territoire national en cas d'agression, de conflit armé international ou interne, de graves troubles internes, de calamité publique ou de catastrophe naturelle. La déclaration de l'état d'exception ne suspend pas le fonctionnement des organes de l'État ;

Qu'aux termes de l'article 393 de la Constitution de la République, l'État garantit la sécurité humaine par des politiques et des actions intégrées, pour assurer la cohabitation pacifique des personnes, promouvoir une culture de paix et prévenir la violence et la discrimination sous toutes leurs formes et la commission d'infractions. Des organes spécialisés à différents échelons administratifs sont chargés de planifier et de mettre en œuvre ces politiques ;

Qu'aux termes de l'article 32 de la loi relative à la sécurité publique et la sûreté de l'État, l'état d'exception peut être déclaré en cas d'agression, de conflit armé international ou interne, de graves troubles internes, de calamité publique ou de catastrophe naturelle ;

Qu'aux termes de l'article 35 de la loi relative à la sécurité publique et la sûreté de l'État, lorsque l'état d'exception est déclaré et que le Président de la République a ordonné l'emploi des forces armées et de la Police nationale, les deux institutions doivent se coordonner de manière à ce que les forces armées interviennent en renfort de la Police nationale, à laquelle est confié le maintien de l'ordre public, jusqu'à ce que celui-ci soit rétabli ;

Qu'il est nécessaire de prévenir les effets que peuvent provoquer les agressions envers des agents de la Police nationale et des forces armées, commises dans les cantons de San Juan Bosco et Limón Indaza (province de Morona Santiago) par des groupes illégalement armés, qui attentent à la sécurité des citoyens, à l'intégrité des personnes et à la coexistence pacifique ;

Qu'il importe d'identifier le groupe ou les groupes de personnes armées illégalement qui se sont réunies pour commettre ces actes d'agression, afin d'empêcher la perpétration future d'actes de violence pouvant compromettre les droits fondamentaux des citoyens ;

Que certains médias locaux ont servi de plateforme d'incitation aux actes d'agressions et de violence précitées ;

Que le Ministre de la coordination de la sécurité a sollicité par la communication n°MICS-DM-2017-0026 du 9 janvier 2017 la reconduction de l'état d'exception ;

En vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 164 et suivants de la Constitution de la République, et 29, 32 et suivants de la loi relative à la sécurité publique et la sûreté de l'État,

Décète :

Article premier — L'état d'exception est prolongé sur le territoire de la province de Morona Santiago, en raison des agressions commises dans les cantons de San Juan Bosco et Limón Indaza de la province de Morona Santiago contre des agents de la Police nationale et des forces armées au cours du mois de décembre 2016 par des groupes illégalement armés, qui ont attenté à la sécurité des citoyens, à l'intégrité des personnes et à la coexistence pacifique, et provoquent de graves troubles internes dans cette province de la région amazonienne.

Article 2 — Des unités de la Police nationale et des forces armées sont mobilisées pour assurer le maintien de l'ordre public dans la province de Morona Santiago.

Le Ministre de la défense nationale et le Ministre de l'intérieur prennent les mesures nécessaires, dans le cadre du Commandement conjoint des forces armées et de la police nationale, pour garantir aux habitants de la province de Morona Santiago une sécurité intérieure, citoyenne et humaine, droit consacré par la Constitution de la République et devoir fondamental de l'État.

Article 3 — Les droits prévus aux alinéas 13, 14 et 22 de l'article 66 de la Constitution de la République et le droit à l'information visé à l'alinéa 4 de l'article 165 de la Constitution sont suspendus sur le territoire de la province de Morona Santiago. Il s'agit : du droit à la liberté d'expression et d'opinion, du droit d'association et de réunion, du droit de circuler librement et du droit à l'inviolabilité du domicile, certains citoyens provoquant des actes de violence qui constituent un risque pour leur vie ou leur intégrité physique.

Le Ministère de la coordination de la sécurité déterminera les modalités d'application de cette mesure, en particulier pour assurer pleinement la réalisation du processus électoral en cours.

Article 4 — L'état d'exception est prorogé pour une durée de 30 jours à partir de la signature du présent décret exécutif. Son champ d'application territorial est la province de Morona Santiago.

Article 5 — La présente déclaration sera notifiée à l'Assemblée nationale, à la Cour constitutionnelle, à l'Organisation des États américains et à l'Organisation des Nations Unies.

Article 6 — Le Ministre de la défense nationale et le Ministre de l'intérieur sont chargés de la mise en application du présent décret exécutif qui entrera en vigueur à partir de la date de sa délivrance, sans préjudice de sa publication au Registre officiel.

Fait à San Francisco de Quito, district métropolitain, le 12 janvier 2017.

Le Président constitutionnel de la République
(*Signé*) Rafael Correa Delgado

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Ecuador

*Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United Nations:
3 February 2017*

*Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
3 February 2017*

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3
DE L'ARTICLE 4

Équateur

*Dépôt de l'instrument auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 3 février 2017*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 3 février 2017*

[TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL]

**MISION PERMANENTE DEL ECUADOR
ANTE LAS NACIONES UNIDAS
NUEVA YORK**

Nota No. 4-2- 217 /2016

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS saluda atentamente a la Secretaría General de las Naciones Unidas, y tiene a honra remitir en calidad de anexo, copia del Decreto Ejecutivo N° 1276, de 14 de diciembre de 2016, suscrito por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mediante el cual decretó el estado de excepción en la provincia de Morona Santiago, tras los enfrentamientos entre uniformados y pobladores de la comunidad que habita alrededor del campo minero “La Esperanza”. Conforme el Derecho Interno, fundamentado en los artículos 164 y siguientes de la Constitución de la República, y en los artículos 29 y 32 de la Ley de Seguridad Pública, por un período de treinta días.

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS hace propicia la oportunidad para reiterar a la Secretaría de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Nueva York, 21 de diciembre de 2016



A la Secretaría de las Naciones Unidas
Nueva York.-

MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR
ANTE LAS NACIONES UNIDAS
NUEVA YORK

No. 4-2-14/2017

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS saluda atentamente a la Secretaría de las Naciones Unidas, en ocasión de referirse a las Notas Verbales Nro. 4-2-217/2016 de 21 de diciembre de 2016; y, Nro. 4-2-12/2017 de 17 de enero de 2017, mediante las cuales se comunicó que debido a las agresiones a miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en los cantones de San Juan Bosco y Limón Indaza, sector "La Esperanza", realizados durante el mes de diciembre de 2016 por parte de grupos ilegalmente armados, el Gobierno de la República del Ecuador a fin de garantizar los derechos, la seguridad interna, ciudadana y humana de los habitantes de la provincia de Morona Santiago, declaró el estado de excepción en estas zonas mediante los Decretos Ejecutivos Nro. 1276 de 14 de diciembre de 2016 y Nro. 1294 de 12 de enero de 2017.

Al respecto, la MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS, tiene el honor de informar que de acuerdo al Artículo 3 de los Decretos Ejecutivos arriba mencionados se han suspendido los derechos contenidos en los artículos 12, 17, 19, 21, 22 y principalmente la disposición contemplada en el 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS solicita comedidamente a la Secretaría de las Naciones Unidas que en apego al Artículo 4, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comunique de tal medida a todos los Estados Partes de este instrumento internacional.

La MISIÓN PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LAS NACIONES UNIDAS hace propicia la ocasión para reiterar a la Secretaría de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta y distinguida consideración.



Nueva York, 3 de febrero de 2017

A la Secretaría de las Naciones Unidas
Nueva York

Nº 1276

RAFAEL CORREA DELGADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo primero de la Constitución de la República, en sus dos primeros incisos establecen:

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.”;

Que, el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República instituye que uno de los deberes primordiales del Estado es el de garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;

Que, el apartado a) del numeral 3 del artículo 66 de la Constitución de la República establece que el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal que incluye entre otras la integridad física, psíquica y moral;

Que, el artículo 164 de la Constitución de la República faculta al Presidente de la República decretar estados de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado.;

Que el artículo 393 de la Constitución de la República estatuye que el *Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno;*

Que, el artículo 32 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece que los casos de estado de excepción son: *agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural;*

Que, el artículo 35 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece: *Declarado el estado de excepción y siempre que el Presidente de la República haya dispuesto el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, deberán coordinar acciones para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional, responsable del mantenimiento del orden público, hasta que éste haya sido restablecido;*

Que, el día de hoy 14 de diciembre de 2016, se han generado agresiones a miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en la provincia de Morona Santiago, Cantones San Juan Bosco y Limón Indaza, por parte de grupos ilegalmente armados, que presuntamente han provocado hasta el momento una víctima mortal y varios heridos, y que por tanto, atentan contra la seguridad ciudadana, la integridad de las personas, y la paz y convivencia social;

Que, se vuelve necesario identificar el grupo o grupos de personas ilegalmente armadas que se han reunido para generar estos actos de agresión, con el fin de evitar futuros hechos de violencia que puedan comprometer los derechos fundamentales de los ciudadanos;

Que, algunos medios locales de comunicación que han servido de plataforma para instigar y provocar los referidos actos de agresión y violencia;

Que, el Ministro de Coordinación de Seguridad, mediante oficio No. MICS-DM-2016-0978 de 14 de diciembre de 2016, solicitó la declaratoria del estado de excepción;

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 164 y siguientes de la Constitución de la República; y, 29, 32 y siguientes de la Ley de Seguridad Pública y del Estado,

DECRETA:

Artículo 1.- DECLARAR el Estado de Excepción en el territorio de la Provincia de Morona Santiago, en razón de las agresiones a miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en la Provincia de Morona Santiago, cantones San Juan Bosco y Limón Indaza, por parte de grupos ilegalmente armados, han atentado contra la seguridad ciudadana, la integridad de las personas, y la paz y convivencia social, que generan una grave conmoción interna en esa provincia de la región amazónica.

Artículo 2.- LA MOVILIZACIÓN de personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, para garantizar el orden interno en la Provincia de Morona Santiago.

Se dispone a los señores Ministros Defensa Nacional y del Interior para que, mediante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ejecuten las acciones necesarias con la finalidad de que se garantice a los habitantes de la Provincia de Morona Santiago seguridad interna, ciudadana y humana, derechos tutelados por la Constitución de la República y deber fundamental del Estado.

Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio de los derechos previstos en los numerales, 13, 14, y 22 del artículo 66 de la Constitución de la República, y el derecho a la información en los términos del numeral 4 del artículo 165 del mismo Código Político, en la Provincia de Morona Santiago, que se refieren a: el derecho a la libertad de expresión y opinión, el derecho a asociarse y reunirse; el derecho a transitar libremente; y el derecho a la inviolabilidad de domicilio por cuanto algunos ciudadanos pretenden generar violencia que constituye un riesgo para su vida o integridad física. El Ministerio de Coordinación de Seguridad determinará la forma de aplicar esta medida.

Artículo 4.- El período de duración de este estado de excepción es de 30 días a partir de la suscripción del presente decreto ejecutivo. El ámbito territorial de aplicación es la Provincia de Morona Santiago.

Artículo 5.- Notifíquese esta declaratoria a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, a la Organización de los Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas.

Artículo 6.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense los Ministros de Defensa y del Interior.

Dado en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 14 de diciembre del 2016.



Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Note No. 4-2-217/2016

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations presents its compliments to the United Nations Secretariat and has the honour to attach a copy of Executive Decree No. 1276 of 14 December 2016, signed by the Constitutional President of the Republic of Ecuador, declaring a state of emergency in the province of Morona Santiago following clashes between uniformed forces and members of the local community near the “La Esperanza” mining camp, in accordance with national law, based on articles 164 et seq. of the Constitution of the Republic and articles 29 and 32 of the Public Security Act, for a period of thirty days.

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations takes this opportunity to convey to the United Nations Secretariat the renewed assurances of its highest consideration.

New York, 21 December 2016

Note No. 4-2-14/2017

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations presents its compliments to the United Nations Secretariat and has the honour to refer to notes verbales No. 4-2-217/2016 of 21 December 2016 and No. 4-2-12/2017 of 17 January 2017, by which it informed the Secretariat that, because of the attacks on members of the National Police and Armed Forces in the cantons of San Juan Bosco and Limón Indaza, in the La Esperanza sector, perpetrated in December 2016 by unlawfully armed groups, the Government of the Republic of Ecuador had decided, in order to protect the rights and the internal, public and human security of the inhabitants of the Province of Morona Santiago, to declare a state of emergency in those areas by Executive Decrees No. 1276 of 14 December 2016 and No. 1294 of 12 January 2017.

In that connection, the Permanent Mission of Ecuador to the United Nations has the honour to inform the Secretariat that, in accordance with article 3 of the aforementioned Executive Decrees and, in particular, the provision in article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, the rights contained in articles 12, 17, 19, 21 and 22 of the Covenant have been suspended.

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations, in accordance with article 4, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights, respectfully requests the Secretariat to inform all States Parties to the Covenant of this measure.

The Permanent Mission of Ecuador to the United Nations takes this opportunity to convey to the United Nations Secretariat the renewed assurances of its highest consideration.

New York, 3 February 2017

No. 1276

**Rafael Correa Delgado
Constitutional President of the Republic**

Considering:

That the first two paragraphs of article 1 of the Constitution of the Republic provide that:

“Ecuador is a constitutional State of rights and justice, a social, democratic, sovereign, independent, unitary, intercultural, multinational and secular State. It is organized as a republic and is governed using a decentralized approach.

Sovereignty lies with the people, whose will is the basis of all authority, and it is exercised through public bodies using direct participatory forms of government as provided for by the Constitution”;

That article 3, paragraph 8, of the Constitution of the Republic stipulates that one of the State’s prime duties is guaranteeing its inhabitants the right to a culture of peace, to integral security and to live in a democratic society free of corruption;

That article 66, paragraph 3 (a), of the Constitution of the Republic provides that the State recognizes and guarantees the right of persons to personal well-being, which includes bodily, psychological and moral safety;

That article 164 of the Constitution of the Republic empowers the President of the Republic to declare a state of emergency in all or part of the national territory in the event of aggression, international or domestic armed conflict, severe domestic unrest, public calamity or natural disaster. The declaration of a state of emergency shall not interrupt the activities of the State’s duties;

That article 393 of the Constitution of the Republic stipulates that the State shall guarantee human safety by means of integrated policies and actions to ensure the peaceful coexistence of persons, to promote a culture of peace and to prevent forms of violence and discrimination and the perpetration of offences and crimes. The planning and application of these policies shall be entrusted to specialized bodies at the different levels of government;

That article 32 of the Public and State Security Act provides that a state of emergency may be declared in the following situations: aggression, international or domestic armed conflict, severe domestic unrest, public calamity or natural disaster;

That article 35 of the Public and State Security Act provides as follows: When a state of emergency has been declared, and if the President of the Republic has ordered the use of the Armed Forces and the National Police, measures shall be coordinated to ensure that the Armed Forces support the National Police, who are responsible for law enforcement until public order has been restored;

That today, on 14 December 2016, members of the National Police and Armed Forces were attacked in the province of Morona Santiago, in the cantons of San Juan Bosco and Limón Indaza, by unlawfully armed groups, resulting in one fatality and a number of wounded reported thus far and therefore representing an attack against public safety, the integrity of persons and peaceful coexistence;

That in order to prevent further acts of violence that could threaten the fundamental rights of citizens, it will be necessary to identify the group or groups of unlawfully armed persons who gathered to carry out these acts of aggression;

That some local communications media have been used as a platform to instigate and incite these acts of aggression and violence;

That the Minister of Security Coordination, by official letter No. MICS-DM-2016-0978 of 14 December 2016, requested the declaration of a state of emergency;

In exercise of the powers conferred upon him by articles 164 et seq. of the Constitution of the Republic, and articles 29, 32 et seq. of the Public and State Security Act,

Hereby decrees:

Article 1. A state of emergency is declared in the territory of the Province of Morona Santiago because the attacks on members of the National Police and Armed Forces in the Province of Morona Santiago, cantons of San Juan Bosco and Limón Indaza, by unlawfully armed groups have undermined public safety, the integrity of persons and peaceful coexistence, and have resulted in serious internal disruption in that province of the Amazon region.

Article 2. The National Police and Armed Forces shall be mobilized to enforce law and order in the Province of Morona Santiago.

The Minister of National Defence and the Minister of the Interior, through the Joint Command of the Armed Forces and the National Police, shall take the necessary measures to guarantee to the inhabitants of the Province of Morona Santiago internal, public and human security, which are rights protected by the Constitution of the Republic and the fundamental duty of the State.

Article 3. The rights set out in article 66, paragraphs 13, 14 and 22, of the Constitution of the Republic, together with the right to information under article 165, paragraph 4, of the Constitution, shall be suspended in the Province of Morona Santiago, with reference to: the right to freedom of expression and opinion; freedom of association and assembly; freedom of movement; and the right to inviolability of the home, as certain citizens are attempting to incite violence constituting a risk to life and bodily safety. The Ministry of Security Coordination shall determine the form of implementation of this measure.

Article 4. This state of emergency shall remain in force for 30 days as from the date of signature of the present executive decree. The territorial scope of application is the Province of Morona Santiago.

Article 5. This declaration shall be communicated to the National Assembly, the Constitutional Court, the Organization of American States and the United Nations.

Article 6. The Minister of Defence and the Minister of the Interior shall be responsible for executing this executive decree, which shall enter into force on the date of issue, without prejudice to the publication thereof in the Official Gazette.

DONE at San Francisco de Quito, Metropolitan District, on 14 December 2016.

(Signed) Rafael Correa Delgado
Constitutional President of the Republic

[TRANSLATION – TRADUCTION]

Note n° 4-2-217/2016

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétariat de l'Organisation, et a l'honneur de lui faire tenir ci-joint une copie du décret exécutif n° 1276, en date du 14 décembre 2016, signé par le Président constitutionnel de la République de l'Équateur et portant déclaration de l'état d'exception dans la province de Morona Santiago, à la suite des affrontements ayant opposé les forces de l'ordre à des habitants de la communauté vivant aux alentours du camp minier « La Esperanza ». Conformément à sa législation interne, notamment aux dispositions des articles 164 et suivants de la Constitution de la République et aux dispositions des articles 29 et 32 de la loi relative à la sécurité publique, l'état d'exception est déclaré pour une période de trente jours.

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les assurances de sa très haute considération.

New York, le 21 décembre 2016

N° 4-2-14/2017

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétariat de l'Organisation et a l'honneur de se référer aux notes verbales n° 4-2-217/2016 du 21 décembre 2016 et n° 4-2-12/2017 du 17 janvier 2017, dans lesquelles il était indiqué que les agressions commises en décembre 2016 par des groupes armés illégaux contre des membres de la Police nationale et des forces armées dans les cantons de San Juan Bosco et de Limón Indanza, dans le secteur « La Esperanza », avaient amené le Gouvernement de la République de l'Équateur à promulguer les décrets exécutifs n° 1276 du 14 décembre 2016 et n° 1294 du 12 janvier 2017 instaurant l'état d'exception dans la province de Morona Santiago, afin de protéger les droits des habitants de la province et d'y garantir la sécurité intérieure, civile et humaine.

À cet égard, la Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies a l'honneur de faire savoir que, conformément à l'article 3 des décrets exécutifs susmentionnés et, plus particulièrement, aux dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les droits prévus aux articles 12, 17, 19, 21 et 22 dudit Pacte ont été suspendus.

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies prie le Secrétariat de l'Organisation de bien vouloir communiquer, conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les mesures prises à tous les États parties à cet instrument international.

La Mission permanente de l'Équateur auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

New York, le 3 février 2017

N° 1276

Rafael Correa Delgado
Président constitutionnel de la République

Considérant :

Que l'article premier de la Constitution de la République dispose en ses deux premiers paragraphes :

« L'Équateur est un État constitutionnel de droits et de justice, social, démocratique, souverain, indépendant, unitaire, interculturel, plurinational et laïc. Il est organisé sous forme de république et gouverné de manière décentralisée.

La souveraineté réside dans le peuple dont la volonté est le fondement de l'autorité et s'exerce à travers les organes du pouvoir public et les formes de participation directe prévues par la Constitution » ;

Qu'aux termes du paragraphe 8 de l'article 3 de la Constitution de la République, l'un des devoirs fondamentaux de l'État est de garantir à ses citoyens le droit à une culture de paix, à la pleine sécurité et à vivre dans une société démocratique et sans corruption ;

Qu'aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 66 de la Constitution de la République, l'État reconnaît et garantit le droit à l'intégrité de la personne, qui comprend notamment l'intégrité physique, psychique et morale ;

Qu'aux termes de l'article 164 de la Constitution de la République, le Président de la République peut décréter l'état d'exception sur tout ou partie du territoire national en cas d'agression, de conflit armé international ou interne, de graves troubles internes, de calamité publique ou de catastrophe naturelle. La déclaration de l'état d'exception ne suspend pas le fonctionnement des organes de l'État ;

Qu'aux termes de l'article 393 de la Constitution de la République, l'État garantit la sécurité humaine par des politiques et des actions intégrées, pour assurer la cohabitation pacifique des personnes, promouvoir une culture de paix et prévenir la violence et la discrimination sous toutes leurs formes et la commission d'infractions. Des organes spécialisés à différents échelons administratifs sont chargés de planifier et de mettre en œuvre ces politiques ;

Qu'aux termes de l'article 32 de la loi relative à la sécurité publique et la sûreté de l'État, l'état d'exception peut être déclaré en cas d'agression, de conflit armé international ou interne, de graves troubles internes, de calamité publique ou de catastrophe naturelle ;

Qu'aux termes de l'article 35 de la loi relative à la sécurité publique et la sûreté de l'État, lorsque l'état d'exception est déclaré et que le Président de la République a ordonné l'emploi des forces armées et de la Police nationale, les deux institutions doivent se coordonner de manière à ce que les forces armées interviennent en renfort de la Police nationale, à laquelle est confié le maintien de l'ordre public, jusqu'à ce que celui-ci soit rétabli ;

Qu'aujourd'hui, 14 décembre 2016, des groupes illégalement armés ont agressé des membres de la Police nationale et des forces armées dans les cantons de San Juan Bosco et Limón Indaza de la province de Morona Santiago, ce qui aurait entraîné la mort de l'un d'entre eux et fait plusieurs blessés jusqu'à présent, et constitue donc une atteinte à la sécurité des citoyens, à l'intégrité des personnes et à la coexistence pacifique ;

Qu'il est nécessaire d'identifier le groupe ou les groupes de personnes armées illégalement qui se sont réunies pour commettre ces actes d'agression, afin de prévenir la perpétration future d'actes de violence pouvant compromettre les droits fondamentaux des citoyens ;

Que certains moyens de communication locaux ont servi de plateforme d'incitation aux actes d'agressions et de violence précités ;

Que le Ministre de la coordination de la sécurité a sollicité par la communication n°M1CS-DM-2016-0978 du 14 décembre 2016 la déclaration de l'état d'exception ;

En vertu des pouvoirs que lui confèrent les articles 164 et suivants de la Constitution de la République, et 29, 32 et suivants de la loi relative à la sécurité publique et la sûreté de l'État,

Décète :

Article premier – L'état d'exception est déclaré sur le territoire de la province de Morona Santiago, en raison des agressions ayant été commises dans les cantons de San Juan Bosco et Limón Indaza de la province de Morona Santiago contre des membres de la Police nationale et des forces armées par des groupes illégalement armés, qui ont attenté à la sécurité des citoyens, à l'intégrité des personnes et à la coexistence pacifique, et provoquent de graves troubles internes dans cette province de la région amazonienne.

Article 2 – Des unités de la Police nationale et des forces armées sont mobilisées pour assurer le maintien de l'ordre public dans la province de Morona Santiago.

Le Ministre de la défense nationale et le Ministre de l'intérieur prennent les mesures nécessaires, dans le cadre du Commandement conjoint des forces armées et de la police nationale, pour garantir aux habitants de la province de Morona Santiago la sécurité intérieure, citoyenne et humaine, droit consacré par la Constitution de la République et devoir fondamental de l'État.

Article 3. – Sont suspendus les droits prévus aux alinéas 13, 14 et 22 de l'article 66 de la Constitution de la République et le droit à l'information visé à l'alinéa 4 de l'article 165 dudit code politique, sur le territoire de la province de Morona Santiago, à savoir le droit à la liberté d'expression et d'opinion, le droit d'association et de réunion, le droit de circuler librement et le droit à l'inviolabilité du domicile, à raison des actes de violence perpétrés par certains citoyens qui constituent un risque pour leur vie ou leur intégrité physique. Le Ministère de la coordination de la sécurité détermine les modalités d'application de cette mesure.

Article 4. – L'état d'exception est déclaré pour une durée de 30 jours à partir de la signature du présent décret exécutif. Son champ d'application territorial est la province de Morona Santiago.

Article 5. – La présente déclaration sera notifiée à l'Assemblée nationale, à la Cour constitutionnelle, à l'Organisation des États américains et à l'Organisation des Nations Unies.

Article 6. – Le Ministre de la défense nationale et le Ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret exécutif, qui entrera en vigueur à partir de la date de sa délivrance, sans préjudice de sa publication au Registre officiel.

Fait à San Francisco de Quito, district métropolitain, le 14 décembre 2016.

Le Président constitutionnel de la République
(*Signé*) Rafael Correa Delgado

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)

Peru

*Notification deposited with the
Secretary-General of the United Nations:
22 February 2017*

*Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio,
22 February 2017*

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3
DE L'ARTICLE 4

Pérou

*Dépôt de la notification auprès du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies : 22 février 2017*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies :
d'office, 22 février 2017*

[TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL]

Misión Permanente del Perú
ante las Naciones Unidas

Permanent Mission of Peru to
the United Nations

7-1-SG/09

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas presenta sus atentos saludos a la Secretaría General de las Naciones Unidas -Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene a honra informar que mediante Decreto Supremo N° 010-2017-PCM, publicado el 7 de febrero de 2017, se proroga por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 8 de febrero de 2017, el Estado de Emergencia en los distritos de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Checa, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de la provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oroncco, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchiuay de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los distritos de Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de la provincia de Satipo; en los distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín.

Cabe resaltar que oportunamente esta Misión Permanente ha cumplido con informar a la Secretaría General sobre prórrogas anteriores al Estado de Emergencia en las localidades indicadas, habiendo sido la última comunicada mediante Nota 7-1-SG/105.

Durante el Estado de Emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24), apartado f) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú.

La Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas hace propicia la oportunidad para reiterar a la Secretaría General de las Naciones Unidas - Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos- las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Nueva York, 22 de febrero de 2017

A la Secretaría General de la
Organización de las Naciones Unidas
Oficina de Asuntos Jurídicos
Nueva York.-

**DECRETO SUPREMO
N° 010-2017-PCM**

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 091-2016-PCM, publicado el 8 de diciembre de 2016, se declaró la prórroga por el término de SESENTA (60) días calendario, a partir del 10 de diciembre de 2016, del Estado de Emergencia en los distritos de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de la provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oroncoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchiway de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los distritos de Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de la provincia de Salto; en los distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín;

Que, de acuerdo a lo informado por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas mediante el Oficio N° 032-JCCFFAA/OAJ, de fecha 18 de enero de 2017, aún subsisten las condiciones que determinaron la declaratoria del Estado de Emergencia en los distritos indicados, cuyo plazo de vigencia se encuentra próximo a culminar; por lo que es necesario prorrogar el mismo, a fin que la presencia de las Fuerzas Armadas, con su acertado accionar, permita que la población se identifique con los fines u objetivos que busca el Gobierno Nacional, esto es, la consolidación de la pacificación de la zona y del país;

Que, el numeral 1) del artículo 137° de la Constitución Política del Perú, establece que la prórroga del Estado de Emergencia requiere de un nuevo Decreto Supremo; asimismo, que en Estado de Emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1095, se establece el marco legal que regula los principios, formas, condiciones y límites para el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, disponiendo en su artículo 4° que la intervención de las Fuerzas Armadas en defensa del Estado de Derecho y protección de la sociedad se realiza dentro del territorio nacional con la finalidad de hacer frente a un grupo hostil, conduciendo operaciones militares, previa declaración del Estado de Emergencia, cuando las fuerzas Armadas asumen el control del orden interno;

Que, el artículo 12° del referido Decreto Legislativo N° 1095, establece que durante la vigencia del Estado de Emergencia, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas designa el comando operacional para el control del orden interno, con la participación de la Policía

Nacional del Perú, la que previa coordinación cumple las disposiciones que dicte el Comando Operacional;

Que, conforme al artículo 3° de la norma acotada, se considera grupo hostil a la pluralidad de individuos en el territorio nacional, que reúne las tres condiciones: (i) están mínimamente organizados; (ii) tienen capacidad y decisión de enfrentar al Estado en forma prolongada y por medio de armas de fuego; y (iii) participan en las hostilidades o colaboran en su realización;

Que, en ese orden de ideas, se precisa que la actuación de los remanentes terroristas, constituyen un grupo hostil, toda vez que reúnen las condiciones antes señaladas;

Que, el numeral 13.2 del artículo 13° de la norma en mención, establece que el empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas contra un grupo hostil durante el Estado de Emergencia, se sujeta a las reglas de enfrentamiento, ejecutándose las operaciones de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario;

Que, el numeral 4.14 del artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1136, Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dispone que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene entre sus funciones, asumir el Comando Único de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cuando el Presidente de la República declare el estado de emergencia con el control del orden interno a cargo de las Fuerzas Armadas; en concordancia con su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2016-DE, de fecha 18 de julio de 2016;

Que, el artículo 1° del Decreto Supremo N° 004-2013-DE de fecha 21 de junio de 2013, precisa los alcances de Comando en acciones u operaciones militares en zonas declaradas en Estado de Emergencia, en los casos en que las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, disponiendo que la planificación, organización, dirección y conducción de las acciones u operaciones militares serán ejecutadas bajo un Comando Unificado, a cargo del respectivo Comando Operacional de las Fuerzas Armadas;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4) y 14) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República.

DECRETA:

Artículo 1°.- Prórroga de Estado de Emergencia

Prorrogar por el término de SESENTA (60) días calendario, a partir del 8 de febrero de 2017, el Estado de Emergencia en los distritos de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay y Pucacolpa de la provincia de Huanta; en los distritos de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oroncoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari, Anchiway de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; en los distritos de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintaypuncu, Roble, Santiago de Tucuma y Andaymarca de la provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; en los distritos de Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina y Villa Virgen de la provincia de La Convención del departamento del Cusco; en los distritos de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene y Río Tambo de la provincia de Salto; en los distritos de Andamarca y Comas, de la provincia de Concepción; y, en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, de la provincia de Huancayo del departamento de Junín.

Artículo 2°.- Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el artículo anterior y en la circunscripción señalada en el mismo, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24), apartado f) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú.

Artículo 3°.- Control del Orden Interno

Disponer que las Fuerzas Armadas asuma el control del Orden Interno, en tanto dure el Estado de Emergencia declarado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo.

La Policía Nacional del Perú apoya a las Fuerzas Armadas para el logro de dicho objetivo en los distritos declarados en Estado de Emergencia.

Artículo 4°.- De la intervención de las Fuerzas Armadas

La actuación de las Fuerzas Armadas se rige por las normas del Derecho Internacional Humanitario, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1095.

Artículo 5°.- Comando Unificado

Disponer que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asuma el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en los distritos indicados en el artículo 1° del presente Decreto Supremo, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1136, Decreto Legislativo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como en el Decreto Supremo N° 004-2013-DE, que precisa los alcances del Comando en acciones y operaciones militares en zonas declaradas en Estado de Emergencia, en los casos en que las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno.

Artículo 6°.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y la Ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, al primer día del mes de febrero del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

[TRANSLATION – TRADUCTION]

The Permanent Mission of Peru to the United Nations presents its compliments to the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, and, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights has the honour to inform it that by Supreme Decree No. 010-2017-PCM, issued on 7 February 2017, the state of emergency declared in the districts of Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llohegua, Canayre, Uchuraccay and Pucacolpa in the Province of Huanta, in the districts of San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari and Anchiuay in the Province of La Mar, Department of Ayacucho; in the districts of Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu, Roble, Santiago de Tucuma and Andaymarca in the Province of Tayacaja, Department of Huancavelica; in the districts of Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina and Villa Virgen in the Province of La Convención, Department of Cusco; in the districts of Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene and Rio Tambo in the Province of Satipo, in the districts of Andamarca and Comas in the Province of Concepción, and in the districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca in the Province of Huancayo, Department of Junin, has been extended for sixty (60) days, with effect from 8 February 2017.

It should be recalled that the Permanent Mission has duly reported to the Secretariat previous extensions of the state of emergency in the aforementioned places, the most recent communication being note No. 7-1-SG/105.

During the state of emergency, the constitutional rights relating to liberty and security of person, the inviolability of the home and freedom of assembly and movement within the territory recognized in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f) of the Political Constitution of Peru are suspended.

The Permanent Mission of Peru to the United Nations takes this opportunity to convey to the Treaty Section of the Office of Legal Affairs, United Nations Secretariat, the renewed assurances of its highest consideration.

New York, 22 February 2017

Extension of the state of emergency in the districts of the Provinces of Huanta and La Mar (Department of Ayacucho), in the Province of Tayacaja (Department of Huancavelica), in the Province of La Convención (Department of Cusco) and in the Provinces of Satipo, Concepción and Huancayo (Department of Junín)

Supreme Decree No. 010-2017-PCM

The President of the Republic

Considering:

That, by Supreme Decree No. 091-2016-PCM, issued on 8 December 2016, the state of emergency was extended for a period of sixty (60) calendar days, with effect from 10 December 2016, in the districts of Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llohegua, Canayre, Uchuraccay and Pucacolpa in the Province of Huanta, in the districts of San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oroncco, Santa Rosa, Tambo, Samugari and Anchiuay, in the Province of La Mar, Department of Ayacucho; in the districts of Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu, Roble, Santiago de Tucuma and Andaymarca in the Province of Tayacaja, Department of Huancavelica; in the districts of Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina and Villa Virgen in the Province of La Convención, Department of Cusco; in the districts of Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene and Rio Tambo in the Province of Satipo, in the districts of Andamarca and Comas in the Province of Concepción, and in the districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca in the Province of Huancayo, Department of Junín;

That in accordance with the report of the Chief of the Joint Command of the Armed Forces, in note No. 032-JCCFFAA/OAJ of 18 January 2017, the circumstances that gave rise to the declaration of a state of emergency in the aforementioned districts still prevail, and that it is therefore necessary to extend the said state of emergency which is about to expire, in order to enable the population, through the presence and appropriate action of the armed forces, to identify with the ends or objectives sought by the national Government, namely the consolidation of peace in the area and in the country as a whole;

That article 137, paragraph 1, of the Political Constitution of Peru provides that the extension of a state of emergency requires a new supreme decree and that, if the President of the Republic so orders, the armed forces shall maintain public order during a state of emergency;

That Legislative Decree No. 1095 establishes the legal framework governing the principles, forms, conditions and limits concerning the use of force by the armed forces in the national territory; article 4 thereof provides that the action of the armed forces in defence of the rule of law and to protect society shall be conducted within the national territory with the aim of resisting a hostile group carrying out military operations, subject to the declaration of a state of emergency, when the armed forces are in charge of maintaining public order;

That article 12 of the above-mentioned Legislative Decree No. 1095 establishes that throughout the state of emergency the Joint Command of the Armed Forces shall appoint the operational command responsible for maintaining public order, with the participation of the National Police of Peru which, after coordination, shall carry out the measures ordered by the Operational Command;

That, in accordance with article 3 thereof, hostile groups are defined as a plurality of individuals in the national territory who meet three conditions (i) have a minimum degree of organization; (ii) have the capacity and intention of confronting the State in a prolonged manner by means of firearms; and (iii) participate in hostilities or collaborate in their realization;

That, accordingly, the conduct of the remaining terrorists means that they constitute a hostile group in that they meet the aforementioned conditions;

That furthermore paragraph 13.2 of article 13 of the aforementioned decree lays down that the use of force by the Armed Forces against a hostile group during a state of emergency is subject to the rules of engagement, the operations being carried out in conformity with international humanitarian law;

That paragraph 4.14 of article 4 of Legislative Decree No. 1136 of the Joint Command of the Armed Forces provides that the Joint Command of the Armed Forces shall, among other functions, assume the Unified Command of the Armed Forces and the National Police when the President of the Republic declares a state of emergency and places the armed forces in charge of maintaining public order, in accordance with its regulation approved by Supreme Decree No. 007-2016-DE of 18 July 2016;

That article 1 of Supreme Decree No. 004-2013-DE of 21 June 2013 stipulates the scope of the Command in respect of military actions or operations in areas where the state of emergency has been declared, when the armed forces are responsible for maintaining public order and provides that the planning, organization, leadership and conduct of military actions or operations shall be carried out under a Unified Command, led by the respective Operational Command of the Armed Forces;

In accordance with article 118, paragraphs 4 and 14, of the Political Constitution of Peru; and

With the approval of the Council of Ministers and subject to the notification of the Congress of the Republic;

Hereby decrees:

Article 1: Extension of the state of emergency

The state of emergency in the districts of Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llohegua, Canayre, Uchuraccay and Pucacolpa in the Province of Huanta, in the districts of San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari and Anchiuay, in the Province of La Mar, Department of Ayacucho; in the districts of Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu, Roble, Santiago de Tucuma and Andaymarca in the Province of Tayacaja, Department of Huancavelica; in the districts of Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina and Villa Virgen in the Province of La Convención, Department of Cusco; in the districts of Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene and Rio Tambo in the Province of Satipo, in the districts of Andamarca and Comas in the Province of Concepción, and in the districts of Santo Domingo de Acobamba and Pariahuanca in the Province of Huancayo, Department of Junín, is hereby extended for a period of sixty (60) calendar days, with effect from 8 February 2017.

Article 2: Suspension of the exercise of constitutional rights

During the state of emergency and in the locations referred to in the preceding article, the constitutional rights relating to liberty and security of person, the inviolability of the home and freedom of assembly and of movement within the territory, recognized in article 2, paragraphs 9, 11, 12 and 24 (f) of the Political Constitution of Peru, shall be suspended.

Article 3: Maintenance of public order

The armed forces shall be responsible for maintaining public order during the state of emergency declared in article 1 hereof.

The National Police of Peru shall support the armed forces with a view to achieving this objective in the districts where a state of emergency has been declared.

Article 4: The action of the armed forces

The action of the armed forces shall be governed by the rules of international humanitarian law, in pursuance of Legislative Decree No. 1095.

Article 5: Unified Command

The Joint Command of the Armed Forces shall assume the Unified Command of the Armed Forces and the National Police in the districts specified in article 1 hereof, in accordance with Legislative Decree No. 1136, the Legislative Decree of the Joint Command of the Armed Forces, and Supreme Decree No. 004-2013-DE, which stipulates the scope of the Command in respect of military actions or operations in areas in which a state of emergency has been declared, in cases where the armed forces are responsible for maintaining public order.

Article 6: Endorsement

The present Supreme Decree shall be endorsed by the President of the Council of Ministers, the Minister of Defence, the Minister of the Interior and the Minister of Justice and Human Rights.

Done at Government House, Lima, on 1st February 2017.

Pedro Pablo Kuczynski Godard
President of the Republic

Fernando Zavala Lombardi
President of the Council of Ministers

Jorge Nieto Montesinos
Minister of Defence

Carlos Basombrio Iglesias
Minister of the Interior

María Soledad Pérez Tello
Minister of Justice and Human Rights

[TRANSLATION – TRADUCTION]

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques (Secrétariat de l'Organisation) et, en application des dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'honneur de l'informer que le décret suprême n° 010-2017-PCM, publié le 7 février 2017, proroge pour une durée de soixante (60) jours calendaires commençant le 8 février 2017 l'état d'urgence déclaré dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay et Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari et Anchiway de la province de La Mar du département d'Ayacucho, dans les districts de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu, Roble, Santiago de Tucuma et Andaymarca de la province de Tayacaja du département de Huancavelica, dans les districts de Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención du département de Cusco, dans les districts de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene et Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts de Andamarca et Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín.

Il convient de rappeler que la Mission permanente a dûment informé le Secrétariat des précédentes prorogations de l'état d'urgence dans les lieux indiqués, la dernière communication en la matière résultant de la note 7-1-SG/105.

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence, l'exercice des droits relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.

La Mission permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler à la Section des traités du Bureau des affaires juridiques (Secrétariat de l'Organisation) les assurances de sa très haute considération.

New York, le 22 février 2017

Prorogation de l'état d'urgence dans les districts des provinces de Huanta et de La Mar du département d'Ayacucho, de la province de Tayacaja du département de Huancavelica, de la province de La Convención du département de Cusco, et des provinces de Satipo, Concepción et Huancayo du département de Junín.

Décret suprême N° 010-2017-PCM

Le Président de la République,

Considérant :

Que, par le décret suprême n° 091-2016-PCM publié le 8 décembre 2016, l'état d'urgence a été prorogé pour une durée de soixante (60) jours calendaires commençant le 10 décembre 2016 dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay et Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oroncco, Santa Rosa, Tambo, Samugari et Anchiway de la province de La Mar du département d'Ayacucho, dans les districts de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu, Roble, Santiago de Tucuma et Andaymarca de la province de Tayacaja du département de Huancavelica, dans les districts de Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención du département de Cusco, dans les districts de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene et Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts de Andamarca et Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín ;

Que, selon la communication N° 032-JCCFFAA/OAJ du chef de l'état-major interarmées, en date du 18 janvier 2017, les circonstances ayant dicté la proclamation de l'état d'urgence, dont le délai d'application vient à expiration, dans les districts précités persistent et il y a donc lieu de le proroger afin de permettre aux forces armées péruviennes de faire le nécessaire pour favoriser l'adhésion de la population aux buts et objectifs recherchés par le Gouvernement central, à savoir la consolidation de la paix dans la zone considérée et dans le pays ;

Qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 137 de la Constitution politique du Pérou, l'état d'urgence se proroge par décret suprême, les forces armées devant pourvoir au maintien de l'ordre public pendant la durée de l'état d'urgence si le Président de la République en décide ainsi ;

Que le décret législatif n° 1095 définit les principes, formes, conditions et limites de l'emploi de la force par les forces armées sur le territoire national, les dispositions de son article 4 stipulant que les forces armées interviennent sur le territoire national en menant des opérations militaires pour défendre l'état de droit et protéger la société afin de faire face à un groupe hostile, après déclaration de l'état d'urgence, lorsque la mission de maintien de l'ordre public est confiée aux forces armées ;

Qu'aux termes de l'article 12 du même décret législatif n° 1095, durant l'état d'urgence, le commandement unifié des forces armées et de la Police nationale incombe à l'état-major opérationnel pour le maintien de l'ordre public, avec la participation de la Police nationale péruvienne, et que la coordination se fait suivant les dispositions de l'état-major opérationnel ;

Que, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susmentionné, est considéré comme un groupe hostile tout ensemble d'individus sur le territoire national qui réunit les trois conditions suivantes : I) avoir un degré minimum d'organisation; II) avoir la capacité et la volonté d'affronter l'État de manière prolongée et au moyen d'armes à feu; et III) participer à des hostilités ou à la réalisation de celles-ci ;

Qu'en conséquence, les terroristes rémanents constituent un groupe hostile chaque fois qu'ils réunissent les conditions susmentionnées;

Que le paragraphe 13.2 de l'article 13 du décret mentionné établit que l'emploi de la force contre un groupe hostile par les forces armées durant l'état d'urgence obéit aux règles d'engagement et de comportement et que les opérations se déroulent dans le respect du droit international humanitaire ;

Qu'aux termes du paragraphe 4.14 de l'article 4 du décret législatif n° 1136, l'état-major interarmées est chargé, entre autres fonctions, d'assurer le commandement unifié des forces armées et de la Police nationale lorsque le Président de la République décrète l'état d'urgence et confie la mission de maintien de l'ordre public aux forces armées, conformément au règlement dudit décret législatif approuvé par décret suprême n°007-2016-DE du 18 juillet 2016 ;

Qu'il résulte de l'article premier du décret suprême n° 004-2013-DE, en date du 21 juin 2013, sur le commandement des actions et opérations militaires dans les zones sous régime d'état d'urgence, que, lorsque la mission de maintien de l'ordre public est confiée aux forces armées, la planification, l'organisation, la direction et la conduite des dites actions et opérations relèvent d'un commandement unifié, confié à l'état-major opérationnel des forces armées compétent;

Conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 4 et 14 de l'article 118 de la Constitution politique du Pérou ; et

Après avis favorable du Conseil des ministres, le Congrès de la République devant en être informé ;

Décète :

Article premier - Prorogation de l'état d'urgence

Est prorogé, pour une durée de soixante (60) jours calendaires commençant le 8 février 2017, l'état d'urgence déclaré dans les districts de Huanta, Ayahuanco, Santillana, Chaca, Sivia, Llochegua, Canayre, Uchuraccay et Pucacolpa de la province de Huanta, dans les districts de San Miguel, Anco, Ayna, Chungui, Oronccoy, Santa Rosa, Tambo, Samugari et Anchiuay de la province de La Mar du département d'Ayacucho, dans les districts de Pampas, Huachocolpa, Quishuar, Salcabamba, Salcahuasi, Surcubamba, Tintay Puncu, Roble, Santiago de Tucuma et Andaymarca de la province de Tayacaja du département de Huancavelica, dans les districts de Echarate, Megantoni, Kimbiri, Pichari, Vilcabamba, Inkawasi, Villa Kintiarina et Villa Virgen de la province de La Convención du département de Cusco, dans les districts de Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Vizcatán del Ene et Río Tambo de la province de Satipo, dans les districts de Andamarca et Comas de la province de Concepción, et dans les districts de Santo Domingo de Acobamba et Pariahuanca de la province de Huancayo du département de Junín ;

Article 2 - Suspension de l'exercice des droits constitutionnels

Est suspendu, pendant la durée de l'état d'urgence visé à l'article précédent et dans les circonscriptions y mentionnées, l'exercice des droits constitutionnels relatifs à la liberté et à la sécurité de la personne, à l'inviolabilité du domicile et à la liberté de réunion et de circulation sur le territoire, consacrés aux paragraphes 9, 11, 12 et 24 f) de l'article 2 de la Constitution politique du Pérou.

Article 3 - Maintien de l'ordre public

Les forces armées assurent le maintien de l'ordre public pendant la durée de l'état d'urgence déclaré à l'article premier du présent décret suprême. La Police nationale péruvienne appuie les forces armées dans cet objectif dans les districts déclarés en état d'urgence.

Article 4 - Intervention des forces armées

L'intervention des forces armées obéit aux normes du droit international humanitaire, conformément aux dispositions du décret législatif n°1095.

Article 5 - Commandement unifié

L'état-major interarmées assure le commandement unifié des forces armées et de la Police nationale dans les districts visés à l'article premier du présent décret suprême, conformément aux dispositions du décret législatif n°1136 portant commandement unifié des forces armées et du décret suprême n°004-2013-DE portant commandement des actions et opérations militaires dans les zones sous régime d'état d'urgence lorsque la mission de maintien de l'ordre public est confiée aux forces armées.

Article 6 - Contreseing

Le présent décret suprême est contresigné par le Président du Conseil des ministres, par le Ministre de la défense, par le Ministre de l'intérieur, et par la Ministre de la justice et des droits de l'homme.

Fait au Palais présidentiel, à Lima, le premier février deux mille dix-sept.

Le Président de la République
Pedro Pablo Kuczynski Godard

Le Président du Conseil des ministres
Fernando Zavala Lombardi

Le Ministre de la défense
Jorge Nieto Montesinos

Le Ministre de l'intérieur
Carlos Basombrio Iglesias

La Ministre de la justice et des droits de l'homme
María Soledad Pérez Tello